

Fue a través de un oficio interno sin ningún tipo de anuncio oficial, que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca —OMB por su sigla en inglés— ordenó ayer la suspensión “temporal” de las subvenciones, préstamos y otras ayudas financieras federales, paralizando potencialmente una amplia gama de programas estimados en cerca de tres billones de dólares. Según se explicó, las agencias estadounidenses deberían presentar un informe detallado sobre estos planes para analizar si dicho gasto se alinea con las prioridades políticas del presidente Donald Trump.

La directiva, de sólo dos páginas, ha desatado esta mañana una tormenta política en los Estados Unidos, debido a que la oposición asegura que Trump no tiene las facultades legales para reducir de esa forma el desembolso de fondos. El senador por Nueva York y líder demócrata en la cámara alta, Chuck Schumer, dijo en un comunicado que el memorándum “desobedece descaradamente la ley”.

Por lo pronto, la medida fue paralizada por una jueza del distrito de Washington hasta el lunes 3 de febrero, tras la presentación de un recurso judicial por parte de una ONG y de varios estados liderados por gobernadores demócratas.

La directiva de la Casa Blanca amenazaba con alterar los fondos que se mueven por toda la economía estadounidense: cientos de miles de millones de dólares en subvenciones a gobiernos estatales, locales y tribales. Ayuda para catástrofes; financiación de la educación y el transporte; préstamos a pequeñas empresas, entre otros.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro de Estados Unidos, Diane Yentel, explicó que según su punto de vista “esta orden es una potencial crisis de gran alarma para las organizaciones no lucrativas y las personas y comunidades a las que sirven”.

Y agregó que “desde la interrupción de la investigación sobre la cura del cáncer infantil hasta la paralización de la asistencia alimentaria, la seguridad frente a la violencia doméstica y el cierre de las líneas directas de ayuda al suicidio, el impacto de incluso una breve pausa en la financiación podría ser devastador y costar vidas. Esta orden podría diezmar a miles de organizaciones y dejar a los vecinos sin los servicios que necesitan”.

Conflicto con el congreso

Tras conocerse el plan de inmediato surgieron dudas sobre su legalidad. Se señala que la directiva potencialmente arrebataría poder al congreso para ejercer una mayor influencia en el gasto público.

Según informa «The New York Times», “parece establecer los cimientos de una posible confrontación en la Corte Suprema sobre el poder que tiene un presidente para negarse a gastar el dinero que ha asignado el congreso, una táctica que

Justicia paralizó la medida

Demócratas acusan a Trump de desobedecer la ley tras suspensión de ayudas estatales



La Casa Blanca ordenó la paralización “temporal” de subvenciones y préstamos federales. “El Congreso aprobó estas inversiones y no son opcionales, son la ley”, retrucó el líder demócrata en el Senado.

los legisladores limitaron de manera drástica durante la presidencia de Richard Nixon”. Y es que desde 1974 existe la llamada “Ley de Control de Retención de Fondos”, que prohíbe que un jefe de Estado pueda retener de forma unilateral y permanente los dineros que ya han sido aprobados por parte del Congreso para el financiamiento de políticas públicas.

“El Congreso aprobó estas inversiones y no son opcionales, son la ley”, dijo el senador Schumer. Y agregó: “Donald Trump debe ordenar a su gobierno que dé marcha atrás inmediatamente y el dinero de los contribuyentes se distribuya entre la gente”.

«The New York Times» cita a un funcionario de “alto rango del gobierno” que negó que la paralización del financiamiento de programas viole la ley. “Describió la pausa como un lapso para realizar una revisión. La financiación de los programas que no entren en conflicto con las políticas del gobierno se reanudará con el tiempo, añadió”.

Recortes varios

La directiva conocida hoy se agrega a una serie de ajustes que Trump ha emprendido en su primera semana (de retorno) en la Casa Blanca. El presidente estadounidense ya había prohibido el gasto en algunas iniciativas relacionadas con la diversidad de género, equidad e inclusión (ayer, por ejemplo, prohibió el financiamiento con fondos públicos de cirugías y tratamientos químicos de reasignación de género para los menores de 19 años).

En esa línea, también ordenó paralizar por 90 días el gasto en ayuda internacional para analizar si entra en conflicto con su programa de gobierno, con la excepción de la ayuda militar a Israel y Egipto. Este anuncio causó particular preocupación en Perú, donde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por su sigla en inglés) tenía programas de lucha contra las drogas con un presupuesto de cerca 630 millones de dólares. “Esto impacta, sin lugar a duda”, dijo el canciller peruano Elmer Schialer.

Asimismo, hoy se conoció que Trump ofreció —vía correo electrónico— a cerca de dos millones empleados del gobierno federal una indemnización de ocho meses de sueldo si renuncian a sus trabajos antes del próximo 6 de febrero.

Tal como consigna el diario «El País» el ofrecimiento está bien por debajo de la promesa que el multimillonario Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), realizó en la campaña presidencial a nombre de Trump. En algún encuentro con partidarios, Musk señaló que los trabajadores despididos de la burocracia serían “generosamente” indemnizados con “dos años o algo así”.

Tras conocerse la oferta de Trump se levantaron no pocas críticas por los efectos en la calidad de los servicios públicos; la administración pública en los Estados Unidos emplea a más de tres millones de personas, lo que lo sitúa como la 15 fuerza laboral del país.

“Depurar el gobierno federal de empleados de carrera tendrá vastas consecuencias no intencionadas que causarían caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal funcional”, señaló Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.

“Entre la avalancha de órdenes ejecutivas y políticas antiobreras, está claro que el objetivo de la administración Trump es convertir al Gobierno federal en un lugar tóxico donde los trabajadores no puedan quedarse aunque así lo deseen”, agregó.